

R2022000264

Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información al Cabildo de Gran Canaria relativa a usos de los espacios naturales protegidos de Gran Canaria para la actividad cinegética.

Palabras clave: Cabildos Insulares. Cabildo Insular de Gran Canaria. Información en materia de medio ambiente.

Sentido: Estimatoria Formal y Terminación.

Origen: Silencio administrativo.

Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Cabildo de Gran Canaria y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 6 de julio de 2022 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de [REDACTED], al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Cabildo de Gran Canaria el 8 de mayo de 2022 y relativa a **usos de los espacios naturales protegidos de Gran Canaria para la actividad cinegética.**

Segundo.- En concreto la ahora reclamante solicitó:

“En los espacios naturales protegidos de Gran Canaria hay zonas de uso moderado, general y restringido con diferentes usos autorizados, autorizables y prohibidos.

Por ejemplo, en el Documento Normativo del Paisaje Protegido de las Cumbres se especifica, en el artículo 43.3.d, que la actividad cinegética será un uso “autorizable” en las Zonas de Uso Moderado (véase http://www.idecanarias.es/resources/PLA_ENP_URB/GC/AD/C-25_Las_Cumbres/259/TNP/pepp_pp_cumb_nu.pdf).

¿Cómo es el procedimiento para autorizar la actividad cinegética en las zonas, como la ZUM, donde no es un uso permitido?

¿Qué reglamento, orden o sistema reglamentario regular este tipo de autorizaciones? (Adjuntar, por favor)

¿En qué circunstancias y bajo qué condiciones podría realizarse dicha actividad cinegética si se autorizase?

¿Quién puede solicitar la autorización? ¿Puede alguien oponerse?

¿Qué departamento o sección de qué organismo puede concederla?

¿Qué informes, estudios de impacto o de otra naturaleza requiere?

¿Porqué razones puede concederse la autorización?

¿En qué manera se daría a conocer dicha autorización y a quienes? (Inclusión en las órdenes de veda, publicación en el BOC, carteles,...)

¿Cuántas autorizaciones de este tipo se han tramitado en Gran Canaria en los últimos 12 años?

¿Cuántas fueron concedidas?

Si se concedieron autorizaciones de este tipo, ¿fueron concedidas a particulares, o a entes de algún tipo? Si fueron concedidas a entidades por favor especificar: sociedad, asociación, etc.

¿Cuál fue la última autorización de este tipo concedida?

Además, existen zonas donde la actividad cinegética está prohibida, como en las Zonas de Uso Restringido (art 41.2.e del mismo documento citado) y Zonas de Uso General (art. 55.2.g). Pero podrían autorizarse “por motivos de gestión y conservación”.

¿En qué circunstancias y bajo qué condiciones podría realizarse dicha actividad cinegética?

¿Qué informes, estudios de impacto o de otra naturaleza requiere?

¿Cómo se realizaría? ¿Quién puede solicitarlo? ¿Es posible oponerse? ¿Quiénes llevarían a cabo los controles?

¿Cómo se daría a conocer que dichos controles van efectivamente a llevarse a cabo, las fechas, lugares y modos en que se haría?

¿Cuántas autorizaciones de este tipo se han tramitado en Gran Canaria en los últimos 12 años?

¿Cuántas fueron concedidas?

Si se concedieron autorizaciones de este tipo, ¿fueron concedidas a particulares, o a entes de algún tipo? Si fueron concedidas a entidades por favor especificar: sociedad, asociación, etc.

¿Cuál fue la última autorización de este tipo concedida?”

Tercero.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 26 de julio de 2022, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Cabildo de Gran Canaria se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación.

Cuarto.- El 5 de agosto de 2022, con registro 2022-005669, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública respuesta del Cabildo de Gran Canaria remitiendo informe emitido por el Director Insular de Transparencia el día 3 de agosto de 2022 y el expediente de acceso completo y ordenado.

Quinto.- En la documentación recibida se acredita la remisión por parte de la Unidad de Transparencia a la ahora reclamante, el 3 de agosto de 2022, del Decreto nº 42/22 de esa misma fecha, de la Consejera de Área de Igualdad, Diversidad y Transparencia, por el que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información.

A tales antecedentes son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, en los términos establecidos en la disposición adicional séptima." El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que "la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos."

II.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula en su Título II su funcionamiento, información y transparencia. En concreto, en el artículo 96, derecho de acceso a la información pública, dispone que "1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Los cabildos insulares están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social". En su apartado tercero atribuye la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública a la presidencia del cabildo insular, que podrá delegarla en los órganos administrativos superiores y directivos de la corporación insular.

III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien

porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 6 de julio de 2022. Toda vez que la solicitud fue realizada el 8 de mayo de 2022, y que no fue atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo.

V.- Examinada la documentación recibida en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 5 de agosto de 2022, se considera que se ha contestado a la solicitud realizada el día 8 de mayo de 2022, si bien fuera de plazo.

De acuerdo con lo anterior, procede estimar por motivos formales la reclamación planteada porque la administración local no ha cumplido los plazos establecidos para resolver la solicitud de información formulada por el ahora reclamante de conformidad con la LTAIP. Por el contrario, el Cabildo de Gran Canaria ha procedido a dar traslado de la información en fase de alegaciones cuando lo apropiado hubiera sido contestar directamente al solicitante en el plazo legalmente establecido de un mes desde que la administración recibió la solicitud de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la LTAIP.

Al ser una contestación extemporánea es parcialmente contraria a los objetivos de la LTAIP. No obstante, considerando que la finalidad de la LTAIP en materia de acceso a la información no es otra que garantizar que la ciudadanía acceda a la información que obra en poder de la administración, se ha cumplido la finalidad de la Ley y procede declarar la terminación del procedimiento de reclamación, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública,

RESUELVO

1. Estimar por motivos formales la reclamación presentada por [REDACTED] contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Cabildo de Gran Canaria el 8 de mayo de 2022 y relativa a **usos de los espacios naturales protegidos de Gran Canaria para la actividad cinegética**, y declarar la terminación del procedimiento por haber perdido su objeto al haber sido contestada la solicitud de acceso a información.
2. Instar al Cabildo de Gran Canaria a agilizar los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso a la información pública para que la respuesta se produzca en plazo.
3. Recordar al Cabildo de Gran Canaria que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP.

De acuerdo con el artículo 51 de la LTAIP, esta reclamación, que es plenamente ejecutiva, es sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución emanada de un órgano del Parlamento de Canarias y que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

EL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Daniel Cerdán Elcid

Resolución Firmada el 17-08-2022

[REDACTED]
SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA